

0049/2024**I**

Tal y como resulta del artículo 1 del Anteproyecto de Ley (APL) presentado a informe, y se explica en la Exposición de Motivos y en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), el objeto de este anteproyecto es la incorporación al ordenamiento jurídico español del régimen aplicable a los administradores de crédito y a los compradores de crédito previsto en la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos que incluye modificaciones a las Directivas 2008/48/CE sobre contratos de crédito al consumo y 2014/17/UE sobre contratos de crédito inmobiliarios. En concreto, el art. 1 del APL establece que este tiene por objeto *la regulación de los compradores de créditos y de contratos de crédito dudosos, así como de los administradores de créditos en que actúen en nombre de un comprador, todo ello respecto a créditos o contratos de crédito dudosos celebrados por entidades de crédito establecidas en la Unión Europea o por establecimientos financieros de crédito.*

El anteproyecto se compone de un título preliminar y seis títulos, con un total de 41 artículos, además de una disposición adicional, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.

II

Cabe comenzar este Informe por lo que se regula en la Disposición Adicional única, que dice así:

Disposición adicional única. Protección de datos personales.

El tratamiento de los datos personales relacionados con las actividades a las que se refiere esta ley se encuentran sometidos y deberán cumplir con [a] lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuya supervisión corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, a las autoridades autonómicas correspondientes.

Como puede observarse, la primera conclusión es que todos los tratamientos de datos personales que se deriven de esta ley, cualesquiera que ellos sean (ya resulten de autoridades públicas, como el Banco de España en tanto que autoridad competente designada por la ley para supervisar las obligaciones derivadas de esta, o por personas o entidades privadas), se regirán por la normativa de tratamiento de datos personales. Esta previsión transpone, en cualquier caso, lo dispuesto en el art. 25 de la Directiva (UE) 2016/679, que literalmente dice: *El tratamiento de datos personales a los efectos de la presente Directiva se realizará de conformidad con los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725.*

Ahora bien, cabe mencionar que los Reglamentos 2016/679 y 2018/1725 regulan ambos los tratamientos de datos personales, pero difieren en función del ámbito subjetivo a quienes se aplican. Así, el Reglamento 2018/1725 se aplica a los tratamientos que realicen las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea (vid. art. 1 del Reglamento 2018/1725 y art. 2.3 del Reglamento 2016/679 -RGPD-), y el RGPD se aplica al resto de los tratamientos realizados como consecuencia de este anteproyecto por quienes no son instituciones, órganos y organismos de la Unión. Por ello, el texto de la Disposición Adicional del anteproyecto debería de modificarse para recoger este diferente ámbito subjetivo, pues en caso contrario resultaría del texto, erróneamente, que a todo tratamiento de datos personales debería de aplicársele tanto el Reglamento 2018/1725 como el RGPD, ambos a la vez.

La determinación de las autoridades competentes para la supervisión de esta materia de tratamiento de datos bajo el régimen del RGPD y la LOPDGDD ya viene establecida en estos textos, por lo que se considera innecesaria su reiteración en esta disposición.

Por tanto, se propondría, como sugerencia, lo siguiente:

Disposición adicional única. Protección de datos personales.

*El tratamiento de los datos personales relacionados con las actividades a las que se refiere esta ley se encuentran sometidos y deberán cumplir con **[a]** lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos*

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por lo que respecta a los tratamientos de datos personales llevados a cabo por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se aplicará el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE

III

El art. 5, apartado 2, letra e), del APL establece que el solicitante de la autorización para operar como administrador de créditos *debe contar con sistemas de gobernanza sólidos y mecanismos de control interno adecuados que garanticen el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales;*

Dicha necesidad deriva de lo dispuesto en el art. 5.1.e) de la Directiva 2021/2167.

Ahora bien, el APL contiene una norma en su art. 5.1 (y en el art. 7.1) que contraviene, en opinión de esta AEPD, el régimen de supervisión que para los tratamientos de datos establece el propio RGPD. Y es que se establece en este apartado 1 que la AEPD habrá de emitir informe “en los aspectos de su competencia” con carácter previo a la decisión del Banco de España de otorgar la autorización.

Esta previsión desconoce el régimen que para los tratamientos de datos se contiene en el nuevo régimen del RGPD, el cual se desvía conscientemente del régimen establecido en la antigua Directiva 95/46/CE.

El RGPD se basa en un sistema de “responsabilidad proactiva”, según el cual (art. 5.2 RGPD) los responsables de los tratamientos serán responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD *y deben ser capaces de demostrarlo* («responsabilidad proactiva») -véase, por ejemplo, reciente, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2024, FJ 5º-, o el art. 24.1 RGPD. Esta es una obligación, garantizar. Para ello, el RGPD (art. 24.3)

establece como posibilidad que [l]a adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor del artículo 40 [RGPD] o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 [RGPD] podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento. La propia Directiva 2021/2167, en su Considerando 51 reconoce que esta es la opción preferida:

*Tanto el Reglamento (UE) 2016/679 como el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo son aplicables al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva. En particular, cuando a efectos de la presente Directiva hayan de tratarse datos personales, deben especificarse los fines precisos, mencionarse la base jurídica pertinente y cumplirse los requisitos de seguridad pertinentes establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, y se deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de finalidad y plazo de retención de datos transparente y proporcionado. **A tales efectos, se prefiere un código de conducta para toda la industria, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679.** Asimismo, la protección de datos personales desde el diseño y la protección de datos por defecto deben incorporarse en todos los sistemas de tratamiento de datos desarrollados y usados en el marco de la presente Directiva. Además, la cooperación administrativa y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros deben ser compatibles con las normas sobre protección de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y atenerse a las normas nacionales sobre protección de datos de transposición del Derecho de la Unión.*

Luego el APL debería de “promover” (art. 40 RGPD) el sistema de establecimiento de un código de conducta de toda la industria de conformidad con lo expuesto por el legislador europeo en la Directiva 2021/2167. Este código de conducta serviría como medio para demostrar que los tratamientos de datos personales cumplen con el RGPD.

Por lo demás, dado que el administrador de créditos actúa siempre en nombre del comprador de créditos (art. 2.1.a) APL), cabe considerar que son “encargados del tratamiento” de estos compradores de créditos (art. 28 RGPD), por lo que sería de aplicación el art. 28.5 RGPD, según el cual: *La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refieren los apartados 1 y 4 del presente artículo.*

La mención anterior relativa a que los administradores de créditos, al actuar en nombre de los compradores de créditos, serían encargados del

tratamiento supone que además de la relación contractual entre ellos respecto de la administración de los créditos dudosos (art. 22 del APL) deberá establecerse entre ellos la relación jurídica propia entre responsable y encargado del tratamiento, mediante un contrato, regulado en el art. 28 y concordantes RGPD y art. 28 y concordantes LOPDGDD, y específicamente con el contenido previsto en el art. 28.3 RGPD.

Por otra parte, y como se advierte de lo dispuesto en los artículos 24.3 y 28.5 RGPD, la intervención de la autoridad de control (AEPD) a la hora de ser utilizada como “elemento para poder demostrar” que un tratamiento cumple con el RGPD está limitada a la posibilidad de que exista un “mecanismo de certificación” de los previstos en el art. 42 RGPD, lo que requiere, además, en todo caso, que se hayan aprobado criterios a tal fin por la AEPD de conformidad con el art. 58.3 RGPD, lo que no ha sido el caso.

El establecimiento por el prelegislador en el APL de que la AEPD informará sobre estas situaciones, como se ha mencionado, no tiene en cuenta el régimen del RGPD a tal fin, pero además coloca a la AEPD en una posición que ignora el carácter de autoridad independiente de la AEPD, sino que también dicho “informe” sobre el cumplimiento por el responsable más que presumiblemente conlleve una alegación de que por la AEPD se aprobó el tratamiento (medidas técnicas y organizativas, las medidas de seguridad, las garantías propuestas) al haber sido estas informadas favorablemente por la autoridad de control en la materia, la AEPD, si posteriormente se le incoa un procedimiento sancionador por infracción de la normativa de protección de datos. En definitiva, se considera que el carácter de autoridad “independiente” de la AEPD quedaría comprometido si la AEPD tuviera que informar de la manera que prevé el art. 5.1 del APL.

Por lo demás, es de advertir, para subrayar lo anterior, que el informe de la AEPD ni siquiera tendría carácter vinculante, por lo que la posición de la AEPD, en esta materia, sería subordinada a la del Banco de España, lo que igualmente se entiende que infringiría lo dispuesto en el art. 51.1 y 52.1 RGPD, que establecen la total independencia de la autoridad de control.

Así las cosas, la forma en que el solicitante debería, en opinión de esta AEPD, demostrar que los tratamientos de datos que propone cumplen con el RGPD sería, en primer lugar, y como expone el Considerando 51 del Reglamento, mediante *“un código de conducta para toda la industria, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679.”* Sería conveniente que este código pudiera abarcar efectivamente “a toda la industria”, lo que abrazaría tanto a las entidades de crédito (EC) como a los establecimientos financieros de crédito (EFC), que están incluidos, si bien parcialmente, en la regulación que hace el APL.

Ahora bien, sí se observa que existe una diferencia entre dichas entidades (EC y EFC) y los administradores de créditos regulados por el APL, y que esta AEPD considera que debería de regularse expresamente. Y es que se considera que los administradores de créditos deberían de nombrar en todo caso un Delegado de Protección de datos. Las EC y las EFC están obligadas expresamente a nombrar un Delegado de Protección de datos (art. 34.1, letras e) y f) LOPDGDD), pero el APL no menciona una obligación similar para los administradores de créditos, cuando parece obvio que a estos efectos no debería de existir tal diferencia entre estas entidades, pues todas ellas parecen encontrarse dentro de la obligación de nombramiento de Delegados de Protección de datos (DPD) que establece el art. 37.1.b) RGPD, que obliga a nombrarlos cuando *las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.*

Entre las funciones del DPD (art. 39 RGPD), se encuentran las de

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;

b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;

Por esa razón, esta AEPD considera que el presente APL debería de establecer la obligación de quienes pretendan obtener la autorización para ser administradores de crédito de nombrar un DPD que lleve a cabo las funciones previstas para esta figura en el RGPD y la LOPDGDD, pues en caso contrario podrían entenderse más desprotegidos los interesados cuyos créditos fueran tratados por un administrador de créditos que no hubiera nombrado DPD que por las EC y EFC que, como hemos visto, están obligadas a nombrarlo conforme a la LOPDGDD.

En conclusión, respecto de este art. 5 (así como en el art. 7) del APL, se considera que se habría de **suprimir la expresión “previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos en los aspectos de su competencia” en el art. 5.1, así como en el art. 7.1**, ambos del APL. En cualquier caso, en relación con el art. 7.1 del APL citado, no se advierten cuáles

serían los aspectos propios de competencia de la AEPD a que se refiere, por lo que el precepto adolecería igualmente de inconcreción

Por conexión con lo expuesto en los párrafos anteriores, en la letra e) del art. 5.2, se debería de añadir como requisito que el solicitante de la licencia haya nombrado a un Delegado de Protección de datos, lo que se sugiere de la siguiente manera

*e) el solicitante debe contar con sistemas de gobernanza sólidos y mecanismos de control interno adecuados que garanticen el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, **y haber nombrado un Delegado de Protección de Datos.***

Y a su vez, en la letra g) del art. 6.1 del APL, dedicado a la documentación que han de aportar los solicitantes para demostrar el cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 5, debería de incluirse no sólo la aportación meramente de “los sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno a que se refiere el artículo 5.2.e)”, sino que estos estén informados debidamente por el Delegado de Protección de datos, y firmados por el responsable del tratamiento (responsable último de dicho cumplimiento de la normativa de protección de datos, art. 5.2 RGPD), una vez verificados y analizados los aspectos necesarios para poder garantizar dicho cumplimiento. Se sugiere la siguiente redacción:

*g) los sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno a que se refiere el artículo 5.2.e). **Dichos sistemas y mecanismos deberán en todo caso ser acompañados de una Declaración responsable firmada por el solicitante de la autorización que declare que dichos sistemas y mecanismos cumplen con la normativa de protección de datos, y específicamente con el Reglamento (UE) 2016/679 y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y que las medidas adoptadas para ello están documentadas de manera que se puede demostrar el cumplimiento. Asimismo, dicha Declaración Responsable deberá acompañarse de un Informe emitido y firmado por el Delegado de Protección de Datos y dirigido al solicitante de la autorización que, con carácter exhaustivo, examine el tratamiento propuesto, las medidas organizativas y técnicas, las medidas de seguridad, y las garantías propuestas, el análisis de riesgos realizado y la Evaluación de Impacto en materia de protección de datos relativa a los tratamientos propuestos, así***

como cualquier otro aspecto que el Delegado de Protección de Datos considere necesario, de manera que este certifique que el tratamiento propuesto garantiza el respeto, la observancia y el cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable.

Es cierto que el penúltimo apartado del art. 6.1 hace referencia a que reglamentariamente se podrán desarrollar los requisitos de documentación que debe acompañar a la solicitud conforme a este apartado, pero se considera que aportaría más seguridad jurídica, de manera paralela al nombramiento de un DPD, que se reflejen estos documentos en la propia ley.

IV

En el art. 9.1, letra f), del APL se establece una obligación de la AEPD de comunicar al Banco de España las sanciones firmes por infracciones muy graves impuestas a los administradores de créditos en materia de protección de datos.

Esto plantea varias cuestiones. En primer lugar, el RGPD no distingue su en su art. 83.4, 83.5 u 83.6 entre infracciones “graves” o “muy graves”, sino que es la LOPDGDD, en sus arts. 72 a 74 la que ha clasificado dichas infracciones, a efectos de prescripción, entre infracciones consideradas muy graves, infracciones consideradas graves e infracciones consideradas leves. Por ello se considera que, sin cambiar el espíritu del precepto, este debería de redactarse con mayor propiedad para recoger lo anterior.

En segundo lugar, si la AEPD ha de comunicar al Banco de España las sanciones firmes impuestas a los administradores de créditos, aunque estos se inscriben en un registro público del Banco de España, se considera que el objetivo de la ley se alcanzaría con mayor facilidad si los administradores de créditos comunicasen a la AEPD, en la primera ocasión de cada procedimiento que se dirija a ellos, dicha condición de administradores de créditos y la misma mención del art. 9.1.f) de la ley (ahora APL) de que la AEPD habrá de comunicar al Banco de España la sanción firme que, en su caso, se imponga por infracción muy grave por incumplimiento de la normativa de protección de datos, lo que a su vez, serviría de advertencia a los propios administradores de créditos acerca de las consecuencias derivadas de la infracción. La inobservancia de esta obligación de los administradores de crédito podría considerarse infracción administrativa conforme al art. 35 del APL.

Por todo ello, se sugiere que el apartado f) del art. 9.1 del APL quede redactado así:

f) Si como resultado de una sanción firme en vía administrativa por infracción considerada muy grave a efectos de prescripción conforme al artículo 72 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se evidencia que la entidad ha dejado de cumplir con los requisitos de autorización como administrador de crédito establecidos en el artículo 5.2.e). La Agencia Española de Protección de Datos comunicará al Banco de España, a tal efecto, la imposición de estas sanciones. A tal fin, en la primera ocasión de cada procedimiento administrativo en que el administrador de créditos se comuniquen con la Agencia Española de Protección de Datos, aquel pondrá en conocimiento de esta, con mención expresa de lo dispuesto en este apartado, su carácter de administrador de créditos y sus datos de identificación en el registro de administradores de crédito del Banco de España.

V

El art. 14 APL regula el derecho a la información del comprador de créditos en relación con los créditos, o contratos de crédito, dudosos que pretende adquirir.

El Considerando 36 de la Directiva (UE) 2021/2167 considera que es esencial que las entidades de crédito faciliten información detallada a los posibles compradores de créditos para permitirles realizar su propia evaluación del valor de los derechos de un acreedor; ahora bien, ello supone, dice el mismo Considerando, que han de observarse al mismo tiempo las normas nacionales y de la Unión de protección de datos, lo que en la parte dispositiva se contiene en el art. 15.5 de esta.

Esta posibilidad de acceso por los posibles compradores de créditos a los datos personales de los deudores de créditos dudosos supone un tratamiento de datos personales (cuando los deudores sean personas físicas) por los posibles compradores de créditos, que la Directiva trata de regular haciendo una ponderación entre dicho derecho y el interés de la Directiva por fomentar un mercado de estos créditos. Para ello, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2083, la Comisión, sobre la base del art. 16.6 de la Directiva, ha plasmado en una norma las normas técnicas de ejecución para la transmisión de la información a los posibles compradores mediante el uso de unas plantillas que deben utilizar las entidades de crédito para facilitar a los

posibles compradores esta información. Este Reglamento de ejecución contiene determinadas normas cuando, en casos específicos, el deudor en el crédito dudoso es una persona física, en cuyo caso establece una salvaguarda a ese derecho de los posibles compradores. Así, en el Considerando 7, dice:

A fin de respetar el principio de proporcionalidad, las plantillas de datos de operaciones relativas a los contratos de crédito dudosos deben exigir información diferente dependiendo de la naturaleza y el volumen de los contratos de crédito dudosos y especificar los campos de datos que habrán de cumplimentarse o las circunstancias en las que no será obligatorio cumplimentar determinados campos de datos. Por el mismo motivo, las entidades de crédito no deben estar obligadas a cumplimentar todos los campos de datos de las plantillas en relación con la totalidad de las operaciones. [Tales] operaciones deben implicar la venta o cesión de: [...], 6) contratos de crédito dudosos celebrados con personas físicas, cuando estas operaciones se refieran a pequeños contratos de crédito no garantizados que no estén incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE.

Como consecuencia de lo anterior, el art. 4 de este Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2083 señala que:

*1. Las entidades de crédito facilitarán información sobre todos los campos de datos marcados como obligatorios en el glosario de datos que figura en el anexo II, excepto cuando dichos campos de datos no sean aplicables con arreglo a los criterios especificados en las instrucciones del anexo III **y con la salvedad de la información relativa a todas las operaciones siguientes:***

(...)

*f) las ventas o cesiones de contratos de crédito dudosos no garantizados **cuando el prestatario sea una persona física** y dichos contratos de crédito no entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE.*

*2. Las entidades de crédito procurarán en la medida de lo razonable facilitar información sobre los campos de datos que no estén marcados como obligatorios en el glosario de datos que figura en el anexo II, **con la salvedad de las operaciones especificadas en el apartado 1, letras a) a f).***

Ello significa que en esos casos a que se refiere la norma citada, las EC no podrán proporcionar información sobre el deudor persona física.

Por lo tanto, en relación con el art. 14 del APL, debería de modificarse la redacción para recoger estos casos, tanto en el apartado 1 como en el 3,

puesto que la manera general en que está redactado el apartado 1 no se compadece con lo recogido por el Reglamento de Ejecución, ni el apartado 3 debe de referirse sólo a las “plantillas”, sino que la transmisión de la información debe de realizarse de la manera que regula el Reglamento de Ejecución (que tiene un contenido más extenso que la plantillas).

Se sugiere la siguiente redacción:

Artículo 14. Derecho a la información en relación con los créditos o contratos de crédito dudosos.

*1. La entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito facilitará al posible comprador de créditos, **con la extensión y limitaciones previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2083 de la Comisión de 26 de septiembre de 2023, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del artículo 16.1 de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las plantillas que deben utilizar las entidades de crédito para facilitar a los compradores información sobre sus exposiciones crediticias en la cartera bancaria**, la información necesaria relativa a los créditos y contratos de crédito dudosos objeto de compraventa, incluyendo la información relativa a los créditos exonerados, conforme a lo publicado en el Registro Público Concursal y, en su caso, sus garantías, a fin de permitirle:*

- a) llevar a cabo su propia evaluación del valor de dichos créditos o de dichos contratos de crédito; y,*
- b) estimar la probabilidad de recuperar ese valor antes de celebrar el contrato de compraventa de los créditos o contratos de crédito.*

2. El posible comprador de créditos garantizará la protección de la información puesta a disposición por la entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito y la confidencialidad de los datos comerciales facilitados.

*3. La transmisión de información de la entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito al posible comprador de créditos a la que se refiere el apartado 1, en lo que se refiere a los créditos o contratos de crédito dudosos, **se realizará de conformidad con lo dispuesto el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2083 de la Comisión de 26 de septiembre de 2023, utilizándose para ello las plantillas previstas en el citado Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2083. Dicho Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2083 será igualmente aplicable, y las plantillas también se utilizarán, cuando***

se vendan los créditos o contratos de crédito dudosos a una entidad de crédito.

VI

En relación con el art. 22 del APL, relativo a la *Relación contractual entre un administrador de créditos y un comprador de créditos dudosos*, nos remitimos a lo expuesto en el epígrafe III de este Informe relativo a la relación contractual que igualmente debe existir entre el responsable y el encargado del tratamiento cuando se tratan datos personales, que ha de regularse de conformidad con el art. 28 RGPD.

No se considera imprescindible modificar en este aspecto este art. 22 APL, más allá de lo que se expone en este epígrafe de este informe, en primer lugar, porque es transposición de la Directiva (UE) 2021/2167, y además porque, dado que los tratamientos de datos que se derivan de dicha Directiva y del presente APL se rigen por el RGPD (art. 2 RGPD y DA única APL), el cumplimiento de lo establecido en dicho art. 28 RGPD es necesario cuando estemos en una relación responsable-encargado, aun cuando no se refleje en el APL. Sí se sugiere, sin embargo, que en el apartado 2 del art. 22 se incluya una nueva letra f) que diga: ***“f) una disposición en la que se recogerán los aspectos necesarios para el desenvolvimiento del contrato en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales”***

Del mismo modo, en el art. 23 APL se recoge la posibilidad de que el administrador de créditos recurra a un proveedor de servicios de administración de créditos para llevar a cabo cualquiera de las actividades de administración de créditos (previstas en el art. 3.12 APL). Correctamente, el art. 12.1 de la Directiva 2167/2021 establece que *Los Estados miembros velarán por que, cuando un administrador de créditos recurra a un proveedor de servicios de administración de créditos para llevar a cabo cualquiera de las actividades de administración de créditos, el administrador de créditos siga siendo plenamente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que le impongan las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva.*

Desde la perspectiva de la normativa de protección de datos, el administrador de créditos parece estar configurado como un encargado del tratamiento del comprador de créditos, e incluso la Directiva 2167 se compadece adecuadamente con dicha circunstancia: en concreto, el art. 11.3 de la Directiva establece que *Los Estados miembros velarán por que el contrato de administración de créditos a que se refiere el apartado 1 contenga un requisito en virtud del cual el administrador de créditos notifique al comprador de créditos antes de externalizar cualquiera de sus actividades de administración de créditos*, lo que adecuadamente se recoge en el art. 22.3

APL. En consecuencia, tal y como está configurado, el proveedor de servicios de administración de créditos parece igualmente un “subencargado del tratamiento” (si se tratasen datos personales), pues realiza funciones para el encargado del tratamiento. Esta AEPD recuerda que, para estos casos de existencia de un subencargado del tratamiento, el art. 28.2 RGPD establece que *[el] encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable*, norma esta de obligado cumplimiento cuando se tratan datos personales, que habrán de cumplir en todo caso los administradores y proveedores de servicios a los administradores de créditos.

Como consecuencia de lo anterior, se sugiere que:

El art. 22.3 APL se modifique para incluir la siguiente redacción:

*3. El contrato de administración de créditos a que se refiere el apartado 1 establecerá un requisito en virtud del cual el administrador de créditos habrá de notificar al comprador de créditos antes de externalizar cualquiera de sus actividades de administración de créditos, **así como tratar los datos personales que resulten necesarios únicamente conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Reglamento (UE) 2016/679.***

Y que en este art. 23.2 se incluya una nueva letra e), con la siguiente redacción: **“f) una disposición en la que se recogerán los aspectos necesarios para el desenvolvimiento del contrato en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales”**

VII

Ya en el epígrafe III de este informe se han expuesto los argumentos por los que la inclusión de la AEPD en las competencias del banco de España en los procedimientos de autorización y revocación de autorizaciones se considera que contraviene el régimen de supervisión que para los tratamientos de datos establece el propio RGPD.

Por esas mismas razones se considera que se debe **suprimir la referencia a la AEPD en el apartado 3 del art. 24 APL, así como el apartado 8 de este mismo art. 24 APL.**

VIII

La Disposición Final primera APL modifica el art. 60, apartado segundo, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. El penúltimo párrafo de dicho apartado segundo (no afectado por la modificación propuesta) hace referencia a que *Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no incluirán, en ningún caso, los regulados en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.*

Pues bien, la referencia a los datos incluidos en el art. 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ha devenido obsoleta, pues dicha norma ha quedado derogada expresamente por la LOPDGDD, en los términos previstos en su Disposición Derogatoria única. La referencia a los datos incluidos en dicho artículo 7 de la LOPD de 1999 debe modificarse para referirse hoy en día a los datos incluidos en los arts. 9 y 10 del RGPD y a su vez en los arts. 9 y 10 LOPDGDD, lo que incluye a su vez las infracciones administrativas (véase art. 7.5 LOPD 1999 y STJUE de 22 junio 2021, C-439/19).

Por tanto, el penúltimo párrafo del apartado segundo de la ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, al que da nueva redacción la Disposición Final primera del APL, se sugiere que tenga la siguiente redacción:

Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no incluirán, en ningún caso, los regulados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), o en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ni tampoco infracciones administrativas.

IX

La disposición final segunda APL modifica la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. Su apartado Cinco añade un nuevo artículo 30 ter en dicha ley 16/2011. Pues bien, se recomienda modificar la redacción del apartado 30.ter.1.c) de dicha ley 16/2011 para añadir expresamente, entre las obligaciones derivadas de dicha norma, que las comunicaciones y gestiones que se realicen para recuperar el crédito habrán

de cumplir la normativa de protección de datos. Quedaría dicho apartado c) de la siguiente manera:

*c) Se efectúe tras una comunicación con carácter previo en la que se haya indicado el saldo deudor impagado, el plazo disponible para regularizar la situación y el importe que se va a adeudar en caso contrario. La repercusión de estos gastos no podrá reiterarse para un mismo saldo impagado. Las comunicaciones y gestiones de recuperación deberán ser respetuosas con la privacidad del cliente, proporcionales a los deberes de información, no resultar excesivas y **respetar en todo caso lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.***

X

En la Exposición de Motivos se considera que las citas que se hace a las “sentencias STS 1546/2023 de 20 de abril de 2023 y la STS 3909/2014, de 13 de octubre de 2014” están erróneamente referenciadas.

En concreto, las cifras 1546/2023 y 3909/2014 no son los números de orden de las sentencias. El art. 213 LEC establece que *En cada tribunal se llevará, bajo la custodia del letrado o letrada de la Administración de Justicia, un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, **que serán ordenados correlativamente según su fecha.***

Pues bien, como puede apreciarse acudiendo a la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esas cifras 1546/2023 y 3909/2014 no son los números de las sentencias, sino que corresponde a su ROJ (que es el número del “Repertorio Oficial de Jurisprudencia” en el CENDOJ). Sus números correlativos serían, 581/2023 y 532/2014, respectivamente, y la cita correcta y completa de dichas sentencias, de conformidad con el citado art. 213 LEC y el identificador europeo de jurisprudencia (ECLI), implantado por el CENDOJ prácticamente desde su aprobación por el Consejo de la Unión Europea en 2011 serían:

a) STS 581/2023, de 20 de abril de 2023, ROJ STS 1546/2023, ECLI:ES:TS:2023:1546, y

- b) STS 532/2014, de 13 de octubre de 2014, ROJ STS 3909/2014,
ECLI:ES:TS:2014:3909